

bre; así como los testimonios de quienes, en medio de su inabarcable tragedia, "lucharon contra la destrucción y la muerte", preservando el sentido de unidad y pertenencia a la vecindad, al barrio, a la colonia. Es aquí donde aparecen, descritos con una gran fuerza de convicción, algunos de los personajes más prototípicos de nuestra ciudad: los organilleros, los mariachis de Garibaldi, los vendedores ambulantes o los habitantes de la legendaria vecindad del "Palacio Negro". Todas estas historias contribuirán, en gran medida, a conformar la memoria colectiva del México de antes del terremoto que, visto desde esa perspectiva, se constituye en un parámetro importante de la historia reciente de la ciudad y del país en su conjunto.

Otro aspecto medular del libro es la visión dicotómica de la realidad social que la autora hace explícita en varias partes del mismo "los pobres murieron y lo perdieron todo, los ricos quedaron ilesos y a salvo", lo cual, lejos de demeritarlo le da más fuerza e intensidad a los relatos de quienes "más sufrieron con el desastre y siguen padeciendo sus consecuencias".

En síntesis, *Zona de desastre* es un valioso aporte periodístico, que no sólo recrea las historias de lo cotidiano, sino que las convierte en un documento imprescindible para la conformación de la memoria histórica de este México de fin de siglo.

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales: *Desastre y Reconstrucción*. FCPyS, junio, 1986, núm. 123.

Laura Loeza R.

El número de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales titulado *Desastre y Reconstrucción*, nos lleva a cuestionarnos en qué medida la magnitud de los daños causados por los sismos de septiembre de 1985 fueron resultado únicamente de fenómenos naturales o de la estructura urbana en su conjunto, que a partir del proceso de expansión de las ciudades se ha orientado por relaciones políticas y económicas que le han dado al espacio urbano un carácter específico.

Los artículos presentados son resultado de investigaciones anteriores realizadas por los autores, quienes se han dedicado durante mucho tiempo al estudio de los problemas que aquí presentan.

El proceso de urbanización tiene que ver con la dinámica de la industria de la construcción, y en general, del capital inmobiliario. No es casual que las clases populares hayan sido las más afectadas por los sismos, pues siempre estuvieron relegadas del mercado inmobiliario. No obstante que el sector privado y el Estado han sido los principales clientes de la industria de la construcción, nunca hubo por parte del Estado una política de vivienda destinada a favorecer de manera específica y perma-

nente a las clases populares. Aún después de los sismos, no ha habido un cambio radical en esta política urbana como lo demuestran los trabajos de Guillermo Boils, Daniel Rodríguez y Alicia Ziccardi.

Dado que el mercado inmobiliario ha estado reservado a los sectores medios y altos, una considerable proporción de las clases populares ha habitado en viviendas en arrendamiento, las cuales durante años han carecido del mantenimiento adecuado, pues una buena parte de ellas amenazaba ya con derrumbarse antes del sismo.

Este tipo de viviendas se caracteriza por la ausencia de las mínimas instalaciones sanitarias, por un alto índice de hacinamiento y por desarrollar actividades económicas típicas del caso urbano en la ciudad de México —talleres artesanales y pequeño comercio—, lo cual provocó que el número de damnificados fuera más alto y que éstos se vieran afectados no sólo por el problema de la vivienda, sino por el del empleo.

Una vez que el Estado dio a conocer su política habitacional, a través de los decretos expropiatorios y el Programa de Renovación Habitacional Popular, se definen las bases para el proceso de reconstrucción desde la perspectiva del aparato gobernante.

Según la opinión de Alicia Ziccardi y Carlos Fidel, los decretos expropiatorios —con todo y sus errores— vienen a romper con las reglas capitalistas del mercado inmobiliario. Por ello despertaron la indignación de la burguesía, la expectación de los habitantes de dichos predios y el elogio de los voceros oficiales.

En cuanto al Programa de Renovación Habitacional Popular, éste está dirigido exclusivamente a los habitantes de aquellos predios que fueron expropiados y no contempla elementos clave como son el arraigo barrial, la escasa solvencia económica de los afectados, además de no contar con un proyecto de vivienda encaminado a resolver el problema de hacinamiento en los predios en cuestión.

Pero esta política del Estado no fue homogénea como lo señala Guillermo Boils, pues se agrupó a los damnificados en tres niveles dándoles un trato distinto a cada uno de ellos: *a*) Los que residían en unidades habitacionales administradas por el sector público; *b*) los habitantes de colonias populares, y *c*) los colonos de clase media propietarios o arrendatarios de su vivienda.

Los sectores medios fueron quienes tuvieron mayor posibilidad de decidir acerca de su nueva vivienda, pues pudieron acceder a los créditos ofrecidos por el Estado. Sin embargo, los sismos no modificaron la política segregativa del Estado ya que sigue vigente la idea de convertir el centro de la ciudad de México en zona turística, comercial y de oficinas públicas y privadas, lo cual relega a los habitantes de las zonas más afectadas a la periferia del Distrito Federal.

A partir de su perspectiva como miembro del Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción, Daniel Rodríguez explica cómo este malestar

que en las clases medias y populares se venía gestando desde años antes —acentuado con la actitud del Estado después del terremoto— desembocó en la organización de los sectores más afectados.

Si bien los habitantes de algunas colonias ya tenían experiencias de lucha y organización, a partir del sismo surgieron nuevas asociaciones que se integraron en la Coordinadora Única de Damnificados (CUD) reivindicando proyectos alternativos de vivienda.

Al respecto, Mario Bassols y Javier Delgadillo nos muestran las diferentes características que asumió el movimiento de damnificados en Ciudad Guzmán. El trabajo constituye el único estudio conocido sobre las consecuencias de los sismos de septiembre en aquella región del estado de Jalisco.

Se afirma que en Ciudad Guzmán, los habitantes de las colonias que no contaban con una experiencia previa de organización, no lograron articular un movimiento y prefirieron migrar a otras zonas o “solucionar” sus problemas de manera particular.

Los autores destacan la presencia del clero en el proceso de reconstrucción, al tener un trabajo de base realizado años atrás en las colonias populares. Cabe señalar la ausencia de los partidos de izquierda y de la CONAMUP en la región.

Pero no sólo la política habitacional adquiere relevancia en este trabajo. La política laboral es abordada por Antonio Alonso, quien presenta un estudio sobre la industria del vestido, desde sus inicios, hasta los días posteriores al sismo.

Al igual que ocurrió con la vivienda, las irregularidades con que funcionaba la industria del vestido eran conocidas ya antes por algunos investigadores y por las autoridades competentes. En esta rama de la producción, los industriales venían basándose en dos mecanismos de sobreexplotación de la mano de obra: el trabajo mal remunerado con salarios muy por debajo del mínimo, que eventualmente ofrecía escasas prestaciones como el Seguro Social; y el trabajo a domicilio en zonas urbanas con alto índice de desempleo y subempleo, así como en zonas rurales. Estas prácticas contaron con el velado respaldo de las autoridades durante mucho tiempo.

Dentro de la estructura urbana destacan también por su importancia las comunicaciones y transportes, mismos que se vieron seriamente afectados por el sismo, llegando incluso a suspender sus servicios con lo que afectaron las obras de rescate.

Margarita Camarena analiza brevemente el tema y propone un “plan de emergencia urbana” tendiente a evitar que las comunicaciones y transportes suspendan sus servicios en caso de desastre. Según la autora, este plan deberá contar con un centro coordinador de acciones preventivas, de emergencia y actualización que facilite la labor conjunta de la sociedad civil y los grupos especializados.

Un tema en que coinciden todos los autores, es el de la reconstrucción.

Sin embargo, éste adquiere relevancia en los trabajos de Ángel Bassols y Javier Delgadillo/Mario Bassols, quienes resaltan la importancia de los estudios urbano-regionales y consideran que, en gran medida, los efectos sociales de los sismos en las ciudades, son consecuencia del desequilibrio regional.

Plantean pues, que el proceso de reconstrucción requiere tomar en cuenta a la totalidad del territorio nacional, teniendo como base una estrategia de desarrollo regional. Ésta debe poner especial atención en el control del crecimiento de las zonas metropolitanas más grandes. Es preciso además que se cumpla el modelo de ciudades de entre 500 mil y un millón de habitantes y sobre todo, que se consideren los recursos naturales actuales y potenciales de cada región, para el surgimiento de nuevas ciudades. Es decir, se precisa de un replanteamiento de la política de planeación.

A lo largo del trabajo, encontramos coincidencia en la manera como los diferentes autores conciben el proceso de reconstrucción. Para comprenderlo, ponen especial atención en tales elementos: la estructura urbana de la ciudad, las organizaciones sociales anteriores y posteriores a los sismos y los grupos políticos que han intervenido en el proceso.

Se define pues el proceso de reconstrucción como un proceso democrático que enfrente las desigualdades sociales y se traduzca en mejores condiciones de vida y de trabajo para los sectores mayoritarios de la sociedad. Los autores atribuyen a estos grupos la tarea de lograr que dicho proceso se lleve a cabo.

Las limitaciones que presentan estos trabajos, es que fueron realizados uno o dos meses después de los terremotos, por lo cual no contemplan aspectos importantes acerca de la trayectoria que han seguido los problemas abordados en el presente trabajo. Sin embargo, son un llamado a la reflexión sobre la necesidad de un cambio radical en las políticas que han regido la vida de nuestras ciudades y han orientado su desmedido crecimiento.